

LA INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO EN LA HISTORIA

Coordinadora Remedios Aranda Rodríguez



ACTAS DEL CONGRESO “INCIDENCIAS DEL LENGUAJE EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS A LO LARGO DE LA HISTORIA” CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE GETAFE, MADRID, LOS DÍAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2015

Comité Organizador: Remedios Aranda Rodríguez (UC3M); Federica Pezzoli (UC3M) y M^a del Pilar Pérez Álvarez (UAM).

Comité Científico: Remedios Aranda Rodríguez (UC3M); Lourdes Blanco Pérez-Rubio (UC3M) y María del Pilar Pérez Álvarez (UAM)

Autor/es: ÁLVAREZ ALONSO, Clara/ ARANDA RODRÍGUEZ, Remedios/ BISCOTTI, Bárbara/ DÍAZ ROMERO, M^a Rosario/ GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA, María de la O/ HERCE MAZA, José Ignacio/ JUÁREZ TORREJÓN, Angel/ PÉREZ ALVAREZ, M^a. Del Pilar/ SIERRA PÉREZ, María Isabel.

Directora: Aranda Rodríguez, Remedios

Departamento/Instituto: Universidad Carlos III de Madrid. Instituto Universitario Lucio Anneo Seneca.

ISBN: 978-84-16829-17-0

Fecha de edición: 2017

Palabras clave: Interpretación; negocio jurídico; contratos; lenguaje; Marco Común de Referencia; testamento; propiedad; Derecho Romano; Epikeia; Francisco Suárez.

Versión electrónica disponible en e-Archivo:

<http://hdl.handle.net/10016/24997>

Derechos:



Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España

INDICE

| | |
|--|-----|
| PRÓLOGO | 5 |
| MARÍA DEL PILAR PÉREZ ALVAREZ. INFLUENCIA DEL PRINCIPIO CANÓNICO <i>QUI TACET, CONSENTIRE VIDETUR</i> EN LA DOCTRINA DEL SILENCIO..... | 7 |
| BARBARA BISCOTTI. SOPRAVVENIENZE, RISCHIO CONTRATTUALE, <i>LITORA</i> E CONCESSIONI, TRA DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO. | 33 |
| CLARA ÁLVAREZ ALONSO. INTERPRETACIÓN Y EQUIDAD: DE LA AEQUITAS MEDIEVAL A LA EPIKEIA ALTOMODERNA..... | 79 |
| MARÍA GOÑI RODRÍGUEZ DE ALMEIDA. “CUANDO LA DESIGNACIÓN DE HEREDERO NO RESULTA CLARA: SUPUESTOS Y REGLAS COMPLEMENTARIAS DE INTERPRETACIÓN TESTAMENTARIA”..... | 110 |
| M^a DEL ROSARIO DÍAZ ROMERO. "LA INTERPRETACIÓN Y LOS EFECTOS DE LOS TÉRMINOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO”..... | 138 |
| ISABEL SIERRA PÉREZ. “LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL” | 156 |
| REMEDIOS ARANDA RODRÍGUEZ. LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL DERECHO EUROPEO..... | 170 |
| ÁNGEL JUÁREZ TORREJÓN. LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS COMO REGLAS DISTRIBUIDORAS DE LA RESPONSABILIDAD POR LAS DECLARACIONES | 190 |
| JOSÉ IGNACIO HERCE MAZA. EL DOCTOR EXIMIUS: ANTIGUAS Y NUEVAS DOCTRINAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS. | 202 |

LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL DERECHO EUROPEO

REMEDIOS ARANDA RODRÍGUEZ

Profesora Titular de Derecho Civil UC3M³⁷²

Sumario. I. Introducción. II. Normas de interpretación en el Derecho Europeo. 1. Situación actual. 2. La normativa de interpretación en el Marco Común de Referencia 2.1. Criterio de interpretación general. 2.2. Criterios a tener en cuenta en la búsqueda de la voluntad común. 2.3. Regla contra-proferentem. 2.4. Preferencia de las cláusulas negociadas individualmente. 2.5. La interpretación sistemática. 2.6. La conservación del contrato. 2.7. Utilización de distintos idiomas a la hora de redactar el contrato. 2.8. Interpretación de otros actos jurídicos. III. Conclusiones. IV Bibliografía.

1-INTRODUCCIÓN

Como todos sabemos la interpretación del contrato busca básicamente averiguar cuál es el sentido y alcance del acuerdo de voluntades en que ése consiste. Como ya señalara DE CASTRO, “la interpretación es tarea previa y de general trascendencia en la dogmática del negocio jurídico. La declaración de voluntad es donde, en el negocio, se manifiesta auténticamente la autonomía privada; y el negocio será aquello que se deduzca de la interpretación. De hecho, todas las cuestiones que se plantean respecto al negocio jurídico están tan íntimamente unidas a la interpretación, que la solución que se proponga para cada una de ellas condicionará el alcance de la interpretación, y, a su vez, aquella resultará predeterminada por el método adoptado para la interpretación”³⁷³.

Por supuesto, como la mayoría de la doctrina ha señalado, hemos de diferenciar la interpretación del contrato y sus normas de la interpretación de las normas. En este

³⁷² ararodri@der-pr.uc3m.es

³⁷³ DE CASTRO Y BRAVO: *El negocio jurídico*, reimpresión de la edición facsímil de 1971, Civitas, Madrid, 1985, p. 77.

sentido puede decirse con todos a través de DIEZ-PICAZO que : “mientras la tarea del intérprete-suele decirse, en cuanto a la interpretación de las normas jurídicas, debe limitarse a liberarlas de dudas y oscuridades, siendo por tanto una interpretación esencialmente objetiva, la tarea de quien interpreta un contrato es más ardua y compleja porque además de eliminar las eventuales dudas y ambigüedades del contrato, debe tratar de encontrar la concreta voluntad de las partes contratantes, por lo cual la interpretación del contrato ha de cumplir una función que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva³⁷⁴”.

A nivel nacional, y por tradición histórica que se remonta al Derecho Romano, tenemos normas sobre interpretación del contrato (arts. 1281 a 1289 del Código civil). En dichas normas, se atiende tanto al criterio subjetivo³⁷⁵ como objetivo³⁷⁶ para realizar dicha tarea, pues no podemos olvidar que la interpretación nos permite llegar a conocer lo que quisieron las partes y establecer su común voluntad, solucionando problemas en el momento de la ejecución del contrato. A nivel europeo, continúan ambos criterios de interpretación, si bien, dada la necesidad de armonizar el Civil Law y el Common Law se podría afirmar con PARRA LUCÁN que “Existe una tensión entre interpretación subjetiva y objetiva a lo largo de la historia jurídica europea. La subjetiva predomina hasta finales del s. XIX en la literatura jurídica, no así en la práctica (Cc francés, art. 1156; alemán & 133; español, art. 1281). Pero también hay normas de interpretación objetiva y ésta prevalece en los trabajos de armonización de derecho contractual europeo³⁷⁷”.

³⁷⁴ DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L: Fundamentos del derecho civil patrimonial. I. Introducción. Teoría del contrato, 6ª ed., Civitas-Thomson, Madrid, 2007, p. 495. En este mismo sentido, LÓPEZ LÓPEZ, A.Mª “Comentario a los artículos 1281 y ss”, en Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, XVII-2ª, dir. Por M. Albaladejo, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1981, p. 2 ha señalado que interpretación de las normas de carácter general posee unas connotaciones que la hacen distinta de la de los contratos, en cuanto que la primera, aún teniendo en cuenta su intrínseca dificultad, es, como se ha puesto de relieve, mucho más circunscrita, porque se limita a liberar a las normas de las dudas y ambigüedades que eventualmente pueden afectarlas y es, por consiguiente, interpretación esencialmente objetiva, mientras que la segunda debe cumplir la misma finalidad con respecto a una regulación de intereses que alcanza tan solo su verdadero significado si se la refiere a la concreta voluntad de los que la crearon: de donde se deduce que la interpretación del contrato es, a un tiempo objetiva y subjetiva. La interpretación de la norma es la de un principio jurídico abstracto; la interpretación del contrato es la de un supuesto de hecho y sus consecuencias jurídicas, es decir, la interpretación de algo concreto (p. 2).

³⁷⁵ Como sabemos, el criterio principal es atender a la voluntad común de las partes, arts. 1281 y 1282 CC.

³⁷⁶ Criterio cuando no se puede conocer esa voluntad común y necesitamos conocer la declaración contractual con independencia de lo que se quiso por los declarantes (arts. 1284-1289 CC).

³⁷⁷ PARRA LUCÁN, Mª A.:”Interpretación del contrato”, en *Derecho Privado Europeo*, coord.. por Sergio Cámara Lapuente, Colex, Madrid, 2003, pp. 468-469.

Hecha esta primera aproximación, voy a entrar en el objeto de esta ponencia que, como ya conocen, es el analizar la normativa europea sobre interpretación del contrato. Para ello, voy a centrarme en las normas del Marco Común de Referencia comparándolas con otros textos normativos.

II. Normas de interpretación en el Derecho Europeo

1-Situación actual

A nivel comunitario, a la hora de conseguir la unificación del Derecho contractual europeo las instituciones comunitarias han optado preferentemente por la armonización de las distintas legislaciones estatales mediante las Directivas, como normas que imponen a los Estados miembros a adoptar en el plazo previsto en ella las medidas necesarias para alcanzar el resultado perseguido.

En este ámbito destaca la regulación en materia de consumidores. La falta de igualdad y equilibrio entre las partes contratantes ha llevado a desvirtuar la identificación del contrato con la autonomía de la voluntad de ambas partes. Así, en el ámbito del consumo el contrato es un contrato de adhesión, donde una parte, el empresario, está en una situación superior a la otra, el consumidor, y por ello el empresario le impone el contenido sin posibilidad de negociación y a través de condiciones generales. El legislador europeo ha buscado, por ello, proteger al consumidor con diferentes normas. Así, la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores; Directiva 314/1990, del Consejo de 13 de junio sobre viajes combinados, vacaciones combinadas y los circuitos combinados; Directiva 97/7/CE del Parlamento y Consejo sobre protección de los consumidores en materia de contratos a distancia.

En el ámbito de la interpretación de estos contratos, las reglas se orientan a completar la protección del consumidor o usuario. Así, en la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril sobre cláusulas abusivas, se aplican a todo contrato de consumo que constituya un contrato de adhesión con cláusulas no negociadas individualmente. Esta Directiva se ha traspuesto con la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación.

Según esa Directiva, como ha señalado ESPIAU ESPIAU³⁷⁸ la interpretación implica:

- a) Averiguar si las cláusulas se han negociado individualmente o no. Por tanto si es o no un contrato de adhesión.
- b) Proceder a fijar el contenido, significado y alcance de las cláusulas. Ver si la redacción ha sido clara y comprensible (interpretación literal) para determinar la voluntad. En caso de duda, art. 5, se atenderá al sentido más favorable para el consumidor.
- c) Determinar el carácter abusivo o no de las cláusulas generales: Si hay un desequilibrio importante entre las partes en detrimento del consumidor. Habrá que atender a todas las cláusulas del contrato; naturaleza del bien o servicio del contrato y circunstancias que concurrieron en su celebración. Esto implica atender tanto a elementos internos como externos en el momento de la celebración.

En un nivel más general, la normativa europea de interpretación del contrato la encontramos, primero en los Principios de Derecho Contractual Europeo (PECL, arts. 5:101 a 5:107) que posteriormente se han recogido con escasas variantes en el Marco Común de Referencia (DCFR, arts. II-8:101 a 8:107 y II-8:201-8:202). En ellos se han intentado recoger las características comunes de los distintos Estado miembros en la materia, como vamos a ver a lo largo de este trabajo.

2. La normativa de interpretación en el Marco Común de Referencia

2.1. Criterio de interpretación general

El artículo II.8:101. Bajo la denominación “Reglas generales” señala:

“(1) Los contratos se interpretarán de conformidad con la intención común de las partes, incluso cuando esta no coincida con el significado literal de las palabras utilizadas.

(2) Si una parte quiso dar un sentido determinado al contrato o a una cláusula o expresión del mismo y en un momento de la celebración del acuerdo la otra parte

³⁷⁸ ESPIAU ESPIAU, “Interpretación del contrato y bases del derecho contractual europeo”, *Bases de un derecho contractual europeo*, coord. por Santiago Espiau Espiau, Antoni Vaquer Aloy, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 218 y ss.

conocía o es razonable suponer que conocía esta intención, el contrato deberá interpretarse en el sentido dado por la primera.

(3) El contrato se interpretará de la forma que normalmente lo haría una persona razonable:

a) Si no se puede determinar la intención de las partes de acuerdo con lo dispuesto en los dos apartados anteriores.

b) Si surge una cuestión respecto a una persona que no es parte del contrato o a la que la ley no confiere derechos más amplios que si lo fuera, y que razonablemente y de buena fe confió en el significado aparente del contrato”³⁷⁹.

El legislador europeo, en su párrafo primero, y de acuerdo con la concepción general del contrato como acuerdo de voluntades (arts. 1254 CC), recoge como primer criterio general de interpretación del contrato: atender a la intención común de las partes. Este primer criterio general, que se impone a cualquier otro en el ámbito interpretativo, no es más que la elección del criterio subjetivo³⁸⁰ por parte del legislador y es acorde con la posición legal de la mayoría de los Estados miembros europeos. Así, nuestro artículo 1280,1º lo recoge expresamente en igual sentido³⁸¹. Este mismo criterio, ya se recogía en su antecedente art. 5:101³⁸² PECL, y, también se recoge en la Propuesta de modernización del Código civil, art. 1278,1³⁸³.

³⁷⁹ Un precepto similar ya se recogía en la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de Mercaderías de 1980, en su art. 8: “1. *A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención.* 2. *Si el párrafo precedente no fuera aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte.* 3. *Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes”.*

³⁸⁰ La interpretación es subjetiva, como señala DIEZ-PICAZO, *Fundamentos...*, cit., p. 487, cuando se dirige a averiguar o a buscar la voluntad o intención común de los contratantes. Es una interpretación histórica del contrato, que busca reconstruir el pensamiento, intención y propósito de los autores de la regla contractual. En igual sentido, STS 3 de marzo de 2014

³⁸¹ Auto de 29 marzo 2017.

³⁸² 5:101: “El contrato se interpreta de acuerdo con la intención común de las partes aunque difiera del significado literal de las palabras”.

³⁸³ Art. 1278: “Los contratos se interpretarán según la intención común de las partes la cual prevalecerá sobre el sentido literal de las palabras”.

Recientemente, el Código civil francés, tras la reforma de febrero de 2016, recoge los mismo términos que el DCFR en su artículo 1188: “*Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation*”.

Esta regla general de interpretación es preferente en su aplicación a cualquier otra y su fuerza se observa porque incluso predomina la voluntad común aunque no coincida con el “significado literal de las palabras utilizadas”. ¿Podría suponer este predominio que el legislador europeo es contrario a la regla *in literis non fit interpretatio*? Parece que no es así. La regla citada se recoge de manera muy clara en el nuevo artículo 1192 del Código civil francés, tras la reforma de 2016, al señalar: “No se pueden interpretar las cláusulas claras y precisas salvo desnaturalización del contrato³⁸⁴” En este punto, podría decirse como señaló ya DE CASTRO respecto a buscar la voluntad real común frente a la literalidad: “*El Código recoge el principio de tener en cuenta lo que se quiere más que lo que se dice (Ya lo recogía Papiano, D. 50,16,219). Se prefiere la voluntad o intención al sentido literal de las palabras (art. 1281 y 675 CC) Así, señala el TS la misión del intérprete ha de consistir en indagar la verdadera voluntad de los contratantes*³⁸⁵”.

En apoyo de este criterio, se añade el párrafo 2º según el cual cuando una de las partes tenía un determinado sentido para el contrato y la otra parte lo conocía o era razonable que lo conociera, el contrato se interpretará conforme a ese sentido. Esto es,

³⁸⁴ Art. 1192: “*On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation*”.

³⁸⁵ DE CASTRO: *El negocio jurídico*, cit., p. 82. LÓPEZ LÓPEZ: “Comentario art. 1281”, cit., pp. 25-26, quien señala que “*in claris non fit interpretatio*” implica no acudir a conjeturas o interpretaciones si el texto es claro. Los términos son claros porque no dejan lugar a dudas sobre la intención de las partes. Se trata de impedir que ante un texto claro se susciten cuestiones litigiosas de forma artificial. El art. 1281,1º está redactado de modo peculiar, pues con expresión equívoca manda atender a la común intención contractual en función de la literalidad de los términos del contrato. En realidad, significa que la expresión externa de la voluntad contractual sólo es atendible si es reflejo de la intención de los contratantes. Vid. En igual sentido Auto del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2017 que señala: “se ha de partir de que el principio rector de la labor de interpretación del contrato es la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente querida por las partes. esta búsqueda de la intención común de las partes se proyecta, necesariamente, sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera suma de cláusulas, de ahí que la interpretación sistemática (art. 1285 cc) constituya un presupuesto lógico-jurídico de esta labor de interpretación. no obstante, el sentido literal, como criterio hermenéutico, es el presupuesto inicial, en cuanto que constituye el punto de partida desde el que se atribuye sentido a las declaraciones realizadas, se indaga la concreta intención de los contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. cuando los términos son claros y no dejan duda alguna sobre la intención de los contratantes, la interpretación literal no sólo es el punto de partida sino también el de llegada del fenómeno interpretativo, e impide que, con el pretexto de la labor interpretativa, se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa. a ello responde la regla de interpretación contenida en el párrafo primero del art. 1281 cc (“ si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas ”). pero, en otro caso, la interpretación literal también contribuye a mostrar que el contrato por su falta de claridad, por la existencia de contradicciones o vacíos, o por la propia conducta de los contratantes, contiene disposiciones interpretables, de suerte que la labor de interpretación debe seguir su curso, con los criterios hermenéuticos a su alcance (arts. 1282 - 1289 cc), para poder dotar a aquellas disposiciones de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual.»[...] de

esta segunda parte manifiesta su voluntad acorde con el sentido querido por el primer contratante lo que implica concurrencia de voluntades.

Es posible que en determinados supuestos sea imposible conseguir conocer la voluntad común de las partes conforme a los dos primeros párrafos, por lo que el legislador europeo nos da otra posibilidad en el párrafo 3º: interpretarlo conforme lo haría un tercero. Pero no un tercero cualquiera, sino atender a la interpretación que le daría una persona razonable. Es un criterio subsidiario, frente a los anteriores y de carácter más objetivo: el criterio de la razonabilidad. La razón conforme ha señalado VATTIER FUENZALIDA es el principio de conservación del contrato, antes de señalar su ineficacia se sacrifica el criterio general subjetivo por este otro³⁸⁶. Con ello se favorece la seguridad y se agilizan las transacciones económicas. Esto significa que el legislador debe atender a lo que una persona razonable en iguales condiciones que las partes habría considerado sobre el significado del contrato³⁸⁷, similar al criterio de un hombre medio en iguales circunstancias y condiciones que conocemos.

El legislador europeo, dando un paso más, permite también utilizar el criterio objetivo de la razonabilidad cuando el contrato afecta a un tercero de buena fe o un tercero con determinados derechos derivados del contrato y a quien la ley “no le reconoce derechos más extensos que si lo fuera” (Cesionario). En estos casos estamos ante una norma de protección del tercero a quien el legislador defiende de los posibles acuerdos ocultos o fraudulentos de las partes, que él no podría conocer³⁸⁸.

Este criterio objetivo de la razonabilidad³⁸⁹ no se recoge en nuestro Código civil, pero si en la Propuesta de modernización del Derecho de contratos. No obstante, la doctrina lo ha visto a través del concepto de la buena fe objetiva³⁹⁰. Existe, en este punto un problema. Este criterio de la razonabilidad deriva del Derecho inglés, que nosotros no tenemos. Ciertamente parece a nuestra idea de buena fe objetiva diligencia, etc., pero a pesar de ello, nuestro legislador, en ninguna norma del Código en materia de

³⁸⁶ Vid. VATTIER FUENZALIDA, C.: “La interpretación del contrato, entre la intención de las partes y el criterio de una persona razonable”, *Actualidad Civil*, 2010-2, p. 1627. Vid. También, CORTADA CORTIJO, N.: “Interpretación”, *Derecho Europeo de Contratos. Libros II y IV del Marco Común de Referencia*, T.I, coord. por Vaquer Aloy/Bosch Capdevila/Sánchez González, Atelier, Barcelona, 2012, p. 549.

³⁸⁷ Vid. ESPIAU ESPIAU: “La interpretación...” cit., p. 238. En igual sentido, CORTADA CORTIJO: “Interpretación”, cit., p. 550.

³⁸⁸ CORTADA CORTIJO: “Interpretación...”, cit. P. 551 entiende que este criterio ha de aplicarse siempre con independencia del conocimiento de la común intención de las partes.

³⁸⁹ También se recoge en el art. 4.2 recoge dicho criterio hablando de el sentido que una persona sensata de la misma condición que las partes hubiera tenido, y en las mismas circunstancias.

³⁹⁰ Se puede ver en este sentido, DIEZ PICAZO/ROCA/MORALES, *Los principios de Derecho Europeo de Contratos*, Madrid, Civitas, 2000, p. 164; PARRA LUCÁN: “Interpretación...”, cit., p. 470.

interpretación recoge la posibilidad de acudir a este criterio, más bien lo que hace es que si no se consigue encontrar la voluntad común de las partes entonces conforme al 1289 CC: se declarará la nulidad del contrato³⁹¹.

Para conseguir la interpretación del contrato conforme nos indica el artículo que estudiamos, el legislador nos dota de una serie de aspectos a tener en cuenta y que define como aspectos relevantes a la hora de realizar la interpretación, en el artículo siguiente II.8.102. Vamos a continuar con su estudio.

2.2. Criterios a tener en cuenta en la búsqueda de la voluntad común

El artículo II.8.102, bajo la rúbrica “Aspectos relevantes” señala:

“(1) Para interpretar el contrato se atenderá en esencial a lo siguiente:

- a) Las circunstancias en las que el acuerdo se celebró, incluídas las negociaciones preliminares.*
- b) El comportamiento de las partes, incluído el subsiguiente a la celebración del contrato.*
- c) La interpretación que las partes han dado a otras cláusulas o expresiones idénticas o similares a las del contrato y a las prácticas establecidas entre ellas.*
- d) El sentido que habitualmente se confiere a dichas cláusulas y expresiones en el sector y la interpretación que se les hubiera podido dar previamente.*
- e) La naturaleza y objeto del contrato;*
- f) Los usos; y*
- g) La buena fe y la honradez de los tratos.*

(2) Si una persona no es parte del contrato, o por ley no tiene mas derechos que si lo fuera, y ha confiado razonablemente y de buena fe en el significado aparente del contrato, se deberán tener en cuenta las circunstancias mencionadas en los subapartados (a), (b) y (c) anteriores, si bien únicamente en la medida en que esta persona conocía o podía esperarse de manera razonable tales circunstancias”.

El artículo II.8.102 en su párrafo 1º recoge una serie de aspectos relevantes que el intérprete ha de tener en cuenta para fijar el contenido concreto del acuerdo entre las

³⁹¹ En igual sentido, ESPIAU ESPIAU: “La interpretación...”, cit, p. 238.

partes. Son medios interpretativos o criterios a tener en cuenta bien para averiguar el significado y alcance de la común intención de las partes o bien para acertar en su juicio de razonabilidad³⁹².

Todos los criterios que se recogen no implican una lista cerrada y exhaustiva que debe utilizar el intérprete siempre, sino que como se desprende de los términos legales “se atenderá en lo esencial a lo siguiente”, es una enumeración abierta que permite al intérprete utilizar los que necesite para conseguir un resultado. Además, es importante tener en cuenta que la lista recogida mezcla elementos subjetivos y objetivos, es heterogénea. En este sentido, se ha señalado por la doctrina que el legislador nos ofrece una especie de guía con indicaciones para el intérprete³⁹³. Este artículo en términos similares se recoge en la Propuesta de Modernización del Derecho de obligaciones, art. 1279³⁹⁴

Vamos a analizar los distintos criterios establecidos:

a) Criterios subjetivos³⁹⁵: Son básicamente:

1-Las circunstancias en la que se celebró el contrato, incluidos los tratos preliminares.

Esto se recoge también en el Código civil español, como hemos visto en la ponencia anterior. Los tratos preliminares son fundamentales pues nos permiten ver el camino hacia el que se encaminaban las partes. No obstante, pueden excluirse por pacto, conforme al DCFR con base en el II:4:104, mediante mediante las llamadas cláusulas de integridad o absorción (merger

³⁹² Vid. ESPIAU ESPIAU: “La interpretación...”, cit., p. 226. En igual sentido, CORTADA CORTIJO, N: “Interpretación”, cit., p. 553.

³⁹³ CORTADA CORTIJO, N: “Interpretación”, cit., p. 554.

³⁹⁴ Art. 1279: “Para interpretar el contrato se tendrán en cuenta:

1-Las circunstancias concurrentes en el momento de su conclusión, así como los actos de los contratantes, anteriores, coetáneos o posteriores.

2-La naturaleza y el objeto del contrato.

3-La interpretación que las partes hubieran ya dado a cláusulas análogas y las prácticas establecidas entre ellas.

4-Los usos de los negocios.

5-Las exigencias de la buena fe”.

Estas mismas circunstancias han de tenerse en cuenta en materia de interpretación en el caso de los Principios sobre los Contratos comerciales internacionales (Unidroit), conforme deduce la doctrina en los arts. 4.1. y 4.2. Vid. PARRA LUCÁN: “Interpretación...”, cit, p. 472.

³⁹⁵ Estos criterios son acordes con lo señalado en nuestro artículo 1282. Este precepto unido al 1281 se ha interpretado en el sentido de que son una sola norma y reflejan el principio espiritualista, como criterio de prevalencia en la interpretación del contrato. El art. 1282 auxilia al intérprete para intentar buscar la común intención de las partes. Para LÓPEZ LÓPEZ : “Comentario”, cit., pp. 25, 28, 33-34, el 1282 significa que en materia de interpretación contractual no sólo se puede recurrir a datos fuera del tenor literal para averiguar la intención común de los contratantes sino que estos datos están constituidos por la conducta de los mismos, significativa en el orden contractual y apreciada en toda su complejidad.

clauses) que provienen del Common Law³⁹⁶. Estas cláusulas atienden fundamentalmente a la formación del contrato y no a la interpretación, y se trata con su exclusión de evitar incluir en el contrato elementos ajenos al mismo atendiendo sólo a lo suscrito.

2- El comportamiento de las partes, incluso tras la celebración del contrato. La conducta de las partes es un elemento esencial en este ámbito y el elemento principal a valorar para determinar su común intención. Esto puede deducirse de los arts. 1281 y 1282 CC³⁹⁷.

3- Interpretación de las partes a otras cláusulas o expresiones idénticas o similares.

Estos criterios subjetivos se limitan cuando afectan a terceros de buena fe “en la medida en que esta persona conocía o podía esperarse de manera razonable que conociese tales circunstancias”.

b) Criterios objetivos: Se recogen en los apartados d, e, f y g. Así son:

1- El sentido habitual de las cláusulas y expresiones en el sector y la interpretación que se les hubiera podido dar previamente.

2- La naturaleza y objeto del contrato. El legislador lo recoge como elemento de interpretación del contrato, y son elementos que nos pueden permitir

³⁹⁶ CORTADA CORTIJO, N: “Interpretación”, cit., p. 555.

³⁹⁷ Este criterio y su relación con la normativa europea puede verse en la Sentencia núm. 671/2016 de 16 noviembre que señala : “si las partes, durante la vigencia del contrato, contemplaron la posibilidad de que en las anualidades siguientes a la primera el comitente pudiera, a su arbitrio, no realizar pedido alguno, o si por el contrario asumía la obligación de mantener una mínima relación comercial, aunque ésta no se identificara con la obligación de realizar un pedido mínimo para cada anualidad. Con lo que explícitamente da entrada al criterio de interpretación de la conducta de las partes, para llegar a la conclusión de que el comitente, en el marco de la relación negocial celebrada, sí que asumió, al menos, la obligación de mantener la relación comercial con la empresa fabricante, es decir, la de realizar algún pedido del producto encargado. Por lo que no infringe el artículo 1281.1 del Código Civil .Conclusión, por otra parte, concorde con la naturaleza y alcance del contrato celebrado, en donde el fabricante (cláusula segunda) asumía unas costosas obligaciones de fabricación y puesta a disposición del producto que difícilmente podrían resultar lógicas sin el amparo de una previa relación comercial de compra de estos productos. Por último, configurada de esta forma la finalidad o base económica de la relación negocial llevada a cabo entre las partes, también hay que resaltar el carácter esencial del incumplimiento de la demandada en orden a justificar la resolución contractual ejercitada por el fabricante, tal y como señala la sentencia recurrida. En este sentido, esta Sala, entre otras, en su sentencia núm. 638/2013, de 18 de noviembre (RJ 2014, 2233) , concorde con el marco de referencia de los principios del derecho europeo de la contratación (PECL, artículos 8:103 y 9:301, y 87 de la Propuesta de Reglamento), tiene declarado que el incumplimiento esencial, como concepto vinculado al plano satisfactivo del cumplimiento de la obligación, se proyecta en orden a los intereses primordiales que justificaron la relación negocial. Proyección que puede definirse, con carácter general, como las expectativas de cumplimiento de «todo aquello que cabía esperar, de un modo razonable y de buena fe, de acuerdo con la relevancia y características del contrato celebrado». En el presente caso, el mantenimiento de la relación comercial de compra durante la vigencia del contrato. Obligación incumplida de un modo grave por el comitente que durante el año 2009, y en contra de las previsiones establecidas, dejó de realizar pedidos en firme al fabricante”.

encontrar el significado del acuerdo de las partes: voluntad y contenido del contrato. No obstante, este aspecto también se ha recogido por el legislador, en el art. II:9:101 como elementos de integración para dar contenido legal al contrato³⁹⁸.

Como elemento de interpretación es discutible. La doctrina ha señalado que para calificar el contrato primero debemos conocer la voluntad de las partes y hacer un juicio de razonabilidad. Una vez calificado, el tipo contractual nos permitirá dar sentido a determinadas cláusulas o expresiones ambíguas³⁹⁹.

La naturaleza y objeto del contrato se regula en nuestro artículo 1286 CC⁴⁰⁰.

3- Los usos.

El uso como elemento de interpretación se regula en el art. 1287 CC: “uso o costumbre del país”. En palabras de DÍEZ-PICAZO, los usos ya se usaban en Derecho romano, y en el art.1287 tienen función interpretativa de la voluntad común o común intención de las partes, si bien sólo se aplican si las partes lo conocían o no lo habían excluido⁴⁰¹. No se aplica si las partes no lo conocían o lo habían excluido.

4-La buena fe y la honradez de los tratos. La buena fé es un principio general que, como se ha señalado, más que un criterio de interpretación es un principio que inspira a toda la regulación del contrato. Como señala el art. I-1:103: es un principio general que establece el estándar al que los contratantes deben ajustar su conducta “caracterizado por la honestidad, franqueza y toma en consideración de los intereses de la otra parte de la transacción o de la relación en cuestión”. De ahí la necesidad de interpretar las cláusulas oscuras o ambíguas, conforme a la buena fe objetiva, no

³⁹⁸ ESPIAU ESPIAU: “Interpretación...”, cit., p. 238 quien habla de contenido legal u obligaciones contractuales implícitas. CORTADA CORTIJO, N: “Interpretación”, cit., p. 556.

³⁹⁹ Vid. JORDANO BAREA: “La interpretación de los contratos”, en *Libro Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, Vol. 1, Consejo General del Notariado, Madrid, 1988, pp. 312-313; CORTADA CORTIJO: “Interpretación”, cit., p. 556.

⁴⁰⁰ No obstante, la STS de 16 de noviembre de 2016 ha señalado que :” Esta Sala, entre otras, en las SSTs de 26 de marzo de 2013 (núm. 165/2013 (RJ 2013, 6412)), 12 de abril de 2013 (núm. 226/2013 (RJ 2013, 7415)) y 18 de noviembre de 2013 (núm. 638/2013 (RJ 2014, 2233)), también ha resaltado la instrumentación técnica de la «base del negocio» como criterio de interpretación contractual bien con relación a la calificación del contrato, o bien con relación a la determinación del objeto y finalidad del contrato proyectado”.

⁴⁰¹ DÍEZ PICAZO, *Fundamentos*, cit., p. 509-510. LÓPEZ LÓPEZ, “Comentario”, cit., p. 48 señala a este respecto que el 1287 es una norma de interpretación objetiva que supone el previo agotamiento de todos los medios de interpretación subjetiva (ausencia de cualquier indicio, incluso tácito, de voluntad).

subjetiva (creencia o ignorancia de una parte)⁴⁰². Como principio general se regula en el art. 1258 CC⁴⁰³.

2.3. Regla contraproferentem

Tras las dos primeras normas analizadas, donde el legislador otorga al intérprete normas generales y criterios a tener en cuenta para encontrar la voluntad común de las partes, ahora, se ha recogido la regla tradicional de interpretación contra quien propuso el contrato e impuso su contenido. “Interpretatio contra stipulatorem”.

Así, el II.8.103 bajo la rúbrica “Reglas contraproferenten: las cláusulas se interpretarán contra los intereses de la parte que las propuso o de la parte dominante” señala:

“(1) Cuando existan dudas acerca del significado de una cláusula no negociada individualmente, tendrá preferencia la interpretación contraria a los intereses de la parte que la ha propuesto.

(2) En caso de duda sobre el significado de alguna cláusula incluida mediante la clara influencia de alguna de las partes, tendrá preferencia la interpretación contraria a los intereses de ésta”.

El legislador recoge una norma tradicional en todo el ámbito jurídico de protección a una de las partes contratantes y que deriva de la imposición del contenido contractual elaborado por una de las partes a la otra. Significa que toda cláusula dudosa en su redacción o impuesta por una de las partes se interpretará contra los intereses de dicha parte.

Esta norma está recogida en el Marco Común como una verdadera norma interpretativa y no un mero medio o criterio. Es una norma de interpretación objetiva, con independencia de la voluntad de las partes, que busca básicamente, como señalara

⁴⁰² Vid. CORTADA CORTIJO: “Interpretación”, cit., p. 556.

⁴⁰³ Como ha señalado DIEZ-PICAZO, *Fundamentos*, cit., pp. 500-501 el principio de buena fe es un criterio en materia de interpretación, pues todos los contratos deben interpretarse conforme a la buena fe. Es un estándar de conducta arreglada a los imperativos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social imperante. Esto implica que los contratos se interpretarán presuponiendo lealtad y corrección en su elaboración (expresión normal de una persona honesta); y el contrato debe considerarse con el sentido más conforme para llegar al desenvolvimiento leal de las relaciones contractuales. La buena fe implica también confianza y autorresponsabilidad en la interpretación.

JORDANO, proteger la confianza del destinatario y hacer autorresponsable al declarante, siempre respetando la validez del contrato⁴⁰⁴.

Como norma interpretativa, el legislador europeo, a diferencia de lo que ocurría en los PECTL que sólo se aplicaba para los contratos de adhesión y contratos con cláusulas generales (5:103), recoge una regla general aplicable siempre que existan dudas por falta de negociación individual o por superioridad de una de las partes. En este sentido, está claro que sanciona a la parte que por su superioridad ha provocado falta de claridad o comprensibilidad en el contenido contractual⁴⁰⁵.

El intérprete, en estos casos, tras ver que hay una cláusula predispuesta por una parte y ambigua, no va a buscar la voluntad común ni irá al juicio de razonabilidad, sino que resolverá la oscuridad en sentido contrario a los intereses de la parte que lo ocasionó⁴⁰⁶. Esta cláusula no es interpretativa, sino más bien busca el equilibrio de las partes, por lo que su aplicación debe limitarse a los casos en que el manejo de los medios interpretativos no haya permitido alcanzar un sentido claro de la cláusula dudosa. Ahora bien, en materia de consumo, podría llegar a ser abusiva y por tanto no aplicable⁴⁰⁷.

2.4. Preferencia de las cláusulas negociadas individualmente

El artículo II.8:104: *“Las cláusulas negociadas individualmente tienen preferencia sobre las que no lo han sido”*.

⁴⁰⁴ JORDANO BAREA: “La interpretación de los contratos”, cit., p. 316. LÓPEZ LÓPEZ: “Comentario”, cit., pp. 53 y ss, señala que el 1288 es una norma de interpretación objetiva aplicable cuando no hay posibilidad de averiguar cual es la voluntad real, no es una sanción sino un criterio hermeneútico cuando a la oscuridad se suma el no poder establecer la interpretación subjetiva, siempre conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Se debe expresar la voluntad de forma clara, para no lesionar la confianza de la otra parte. Implica autorresponsabilidad de la parte contractual que contra la carga de hablar claro hubiese formulado términos oscuros o ambíguos y se tutela la confianza del otro contratante.

⁴⁰⁵ CORTADA CORTIJO: “Interpretación”, cit., p. 559.

⁴⁰⁶ Es idéntico a lo que recoge el art. 1288 CC: La interpretación de cláusulas oscuras no debe favorecer al que promovió la oscuridad. Y se recoge igualmente en la Propuesta de Modernización de Código civil en Derecho de obligaciones, art. 1280: *“La interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no debe favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad”*. También se regula en los Principios Unidroit, art. 4.6. En este sentido podemos ver las SSTs de 2 de abril de 2009 (RJ 2009, 1754); 15 de julio de 2009 (RJ 2009, 4707) y 20 de julio de 2011 (RJ 2011, 6128). Este artículo no se refiere sólo a consumidores, sino que se aplica a todos los contratos, aunque su ámbito de aplicación esté en los contratos de adhesión. Más limitado en cuanto a sus destinatarios, sólo consumidores, pero con igual contenido es el art. 80,2º TRLGCU que, junto a los arts. 82.4 y 85 a 89 regula las cláusulas abusivas y su nulidad. En materia de cláusulas generales, la Propuesta de modernización tiene una regulación exclusiva en los arts. 1261 a 1264.

⁴⁰⁷ El legislador francés, tras la reforma de 2016, también lo regula al señalar en su art. 1190: *“Dans la doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé”*.

El legislador europeo, siguiendo la regla general de interpretación subjetiva del II.8:101, recoge aquí una regla especial de interpretación donde se recoge la prevalencia de la voluntad común de las partes. No hay duda que si las cláusulas se negocian individualmente entre las partes, la voluntad común de ambos aparece claramente en el contrato y tendrán prioridad frente a las cláusulas generales o prerredactadas por una de las partes⁴⁰⁸. Ciertamente, como ha señalado parte de la doctrina, este precepto tiene muy poca utilidad, pues no es más que una matización del II.8.101 y de su propia interpretación ya se deduce⁴⁰⁹.

Esta regla de prevalencia tiene especial importancia en el campo de las condiciones generales de la contratación, y, por tanto en el ámbito de los consumidores, sujetos especialmente considerados por la Unión Europea y que ya motivó determinadas normas donde se recoge ese principio, como el art. 6.1º de la LGCG⁴¹⁰. No obstante, la normativa del Marco Común de Referencia tiene una extensión general a todo tipo de contratos y no sólo es aplicable a los consumidores.

2.5. La interpretación sistemática

El legislador europeo en el artículo II.8:105, bajo la rúbrica “Referencia al contrato como unidad”, señala:

“Las cláusulas y términos de un contrato deben interpretarse a la luz del contrato en su conjunto”.

El legislador recoge aquí el sistema de interpretación sistemática. El contrato es un todo, un conjunto orgánico, por lo que debe buscarse el sentido relacionando sus términos y cláusulas unas con otras. Sólo así, en esa interrelación, se podrá conseguir encontrar la voluntad común de las partes.

⁴⁰⁸ Esta preferencia en caso de conflicto, si bien en el ámbito de la formación del contrato, se regula en el art. 2.1.21 de los Principios Unidroit: “En caso de conflicto entre una cláusula estándar y una que no lo sea, prevalecerá esta última”. Estos principios también regulan la interpretación sistemática del contrato en el art. 4.4.

En un sentido similar, y dentro de la misma estructura de formación del contrato, la Propuesta de Modernización del Código civil, en su art. 1261 señala: “En caso de contradicción entre una condición general y otra que no lo sea, prevalecerá siempre esta última”.

⁴⁰⁹ Así CORTADA CORTIJO: “Interpretación”, c it., p. 564.

⁴¹⁰ Art. 6.1º: “Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones particulares”. Esta norma se contenía en el derogado artículo 10.2.2. de la LGDCU.

Este criterio es similar al art. 1285 CC, que nos manda realizar la interpretación unas cláusulas contractuales con otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas⁴¹¹. Este valor se recoge igualmente en la jurisprudencia española, viendo el contrato como un todo indivisible. Así, SSTs 18 de junio de 1992 (RJ 1992, 5320) y 30 de noviembre de 1964 (RJ 1964, 5556) y recientemente, en la sentencia núm. 15/2017 de 16 enero⁴¹².

2.6.La conservación del contrato

El art. II-8:106, bajo la rúbrica “Principio de la interpretación que conceda eficacia a las cláusulas” señala:

“Toda interpretación favorable a la licitud o a la eficacia de las cláusulas del contrato será preferida frente a las interpretaciones que las nieguen”.

El legislador europeo, siguiendo la tradición jurídica de todos los ordenamientos europeos (continentales y anglosajones), está a favor de la licitud y eficacia de las cláusulas contractuales como razón del principio de conservación del contrato.

⁴¹¹ Este mismo valor se recoge en el art. 1280,1º de la Propuesta de Modernización del Código civil. El legislador francés, también lo ha recogido claramente en su artículo 1189: “*Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération ils s’interprètent en fonction de celle-ci*”.

⁴¹² «[...] la interpretación literal colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión interpretativa, esto es, que el contrato por su falta de claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los diferentes medios interpretativos a su alcance, para poder dotarlo de un sentido acorde con la intención realmente querida por las partes y de conformidad con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual]». Esto último es lo que ocurre en el presente caso, en donde la sentencia recurrida, conforme a la doctrina jurisprudencial reseñada, advierte expresamente de la insuficiencia de la interpretación literal para dotar, por sí sola, ante la falta de claridad y contradicciones de la literalidad del contrato, de sentido unívoco a la cuestión planteada. Por lo que el recurso a los restantes criterios o medios interpretativos su alcance, no puede constituir infracción del artículo 1281, párrafo primero, del Código Civil. En igual sentido, STS de 16 de noviembre de 2016: “Con carácter general, respecto de las directrices y criterios de interpretación de los contratos, esta Sala tiene declarado el carácter instrumental que presenta la interpretación literal del contrato que se infiere del criterio gramatical del mismo (párrafo primero del artículo 1281 del Código Civil), de forma que no puede ser valorada como un fin en sí misma considerada, o como un dogma del proceso interpretativo, pues la atribución del sentido objeto de la interpretación, y de ahí la unidad lógica del artículo citado, conforme a su segundo párrafo, sigue estando en la búsqueda de la voluntad realmente querida por las partes contratantes. Esto supone, conforme a la interpretación sistemática como presupuesto lógico-jurídico del proceso interpretativo (artículo 1285 del Código Civil), que cuando los términos del contrato no son claros y dejan dudas sobre la intención querida por los contratantes, la interpretación no se detenga en el criterio gramatical y tenga que recurrir a los diferentes medios interpretativos a su alcance, entre otros, a los que constituyen la denominada interpretación integradora del contrato, artículos 1282 y 1283 del Código Civil (entre otras, SSTs núms. 27/2015, de 29 de enero (RJ 2015, 1621) y 274/2016, de 25 de abril (RJ 2016, 1836) “.

Como señala la doctrina⁴¹³, este principio de conservación del contrato se basa en dos consideraciones:

- a) La lógica voluntad de las partes de formalizar un contrato válido y eficaz. = art. 5:106 PECL.
- b) La necesidad de contención del esfuerzo, tiempo y dinero que supondría reiniciar una negociación contractual ya concluida y presumiblemente querida.

Es una regla interpretativa objetiva pues señala cual ha de ser la interpretación resultante pero se une a la común intención de las partes atendiendo a su presunta voluntad de no realizar un contrato ineficaz. Como ha señalado DÍEZ-PICAZO⁴¹⁴, el principio de conservación del contrato es un criterio fundamental en la interpretación, y ha de buscarse la eficacia del contrato. Este principio, proveniente del Derecho francés, con Pothier, se recoge en nuestro Código civil por varias razones: las partes al insertar una cláusula han querido algo; es una regla dictada por la razón: se quiere algo; y, las partes naturalmente han querido hacer una cosa seria y útil. Respecto a este principio, DE CASTRO⁴¹⁵, ha señalado que lo que importa es conocer “cual fuese la inspiración o propósito”, “el espíritu o finalidad que haya presidido el negocio”, no siendo decisivo el nombre dado al negocio sino “la voluntad real”, “la verdadera naturaleza de la convención establecida”.

Este principio se recoge en el art. 1284 CC y se concreta en el art. 1289 CC⁴¹⁶.

2.7.Utilización de distintos idiomas a la hora de redactar el contrato

El legislador, dada la diversidad lingüística de los distintos Estados miembros, ha previsto en el art. II-8:107, el supuesto de “Discrepancias lingüísticas”. Dice así:

“En caso de discrepancia entre las versiones de un contrato redactado en dos o más idiomas, o/y cuando ninguna de ellas revista el carácter de versión oficial, tendrá preferencia la interpretación más acorde con la versión en que se redactó originalmente el contrato”.

⁴¹³ Vid. CORTADA CORTIJO: “Interpretación”, cit., p. 567.

⁴¹⁴ DÍEZ-PICAZO: *Fundamentos...*, cit., p. 498-499.

⁴¹⁵ DE CASTRO: *El negocio jurídico*, cit., p. 89.

⁴¹⁶ Este criterio también se recoge en los Principios Unidroit, art. 4.5. El legislador francés también lo ha recogido expresamente, señalando en su art. 1191: “Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun”.

El legislador ha querido evitar dejar lagunas en materia de interpretación. Como es sabido, la diversidad de lenguas en la Unión Europea, puede motivar que el contrato acordado entre las partes se recoja por escrito en diversas lenguas. Esto, a su vez, puede motivar luego problemas de interpretación de ciertos términos, ante las diferentes versiones existentes. Por ello, si no hay una versión oficial, el legislador acuerda como criterio interpretativo la prevalencia de la versión más acorde con aquella versión en que se redactó originalmente el contrato. Es una norma de carácter imperativo que ya se recogía de forma similar en el art. 5:107 de los PECL⁴¹⁷.

A pesar de parecer un artículo claro, se nos plantea un problema importante: ¿Cuál es la versión auténtica? . El II.8:107 no dice nada, frente a otros textos donde se parte de que la versión auténtica será aquella en la que se redactó originariamente el contrato.

En todo caso, la doctrina⁴¹⁸ ha señalado que habría que atender a:

- a) Si hay versión original fijada de mutuo acuerdo, se atenderá a su contenido.
- b) Si hay versión oficial, redactada y fijada unilateralmente por una de las partes, se atenderá a la versión contra proferente.
- c) No hay versión oficial, se atenderá a la versión en que se redactó originariamente el contrato.
- d) No hay versión oficial y las partes dan a todas las versiones el mismo valor. Las divergencias se resolverán conforme a las normas generales: primero la versión que mejor responda a la común intención; sino, lo que un hombre razonable hubiera entendido.

No existe norma en Derecho español sobre discrepancias lingüísticas. Las partes deben establecer qué versión es la auténtica. Sino, acudiremos a los arts. 1280 y ss. Si lo ha hecho el art. 1281 de la Propuesta de Modernización en los siguientes términos: *“Cuando existan versiones de un contrato en diferentes lenguas y ninguna de ellas haya sido declarada preferente, en caso de discrepancia, se adoptará para la interpretación la versión original”*.

2.8. Interpretación de otros actos jurídicos

⁴¹⁷ También puede verse una norma similar en el art. 4.7 de los Principios Unidroit.

⁴¹⁸ CORTADA CORTIJO: “Intepretación”, cit., p. 569.

Para terminar este trabajo, simplemente, me gustaría hacer referencia a las dos normas que se recogen en II-8:201 y II.8.202 donde se regula la interpretación de actos jurídicos unilaterales. Siguiendo el sistema anterior, el legislador parte de una serie de reglas generales:

II-8:201 Interpretación de otros actos jurídicos. Reglas generales

“(1) Los actos jurídicos unilaterales deberán interpretarse según cabe esperar razonablemente que lo entendiera la persona a la que están dirigidos.

(2) Si se demuestra que la persona que celebra el acto jurídico buscaba otorgar un sentido determinado a éste, o a una cláusula o término del mismo, y en un momento de la formalización la persona a la que estaba dirigido tenía conocimiento o es razonable suponer que tuviera conocimiento de esta intención, el acto jurídico deberá interpretarse en el sentido dado por la primera persona.

(3) No obstante, el acto jurídico se interpretará en el sentido que normalmente le daría una persona razonable:

a) si no son de aplicación el apartado (1) ni el apartado (2).

b) si surge una cuestión respecto a una persona que no es el destinatario del acto jurídico o a la que la ley no confiere derechos más amplios que si lo fuera y que razonablemente y de buena fe confió en el significado aparente del contrato”.

Y, en su segundo artículo, simplemente acude a la aplicación analógica de la normativa de contratos.

II.8:202 Aplicación de otras reglas por analogía

“Las disposiciones de la sección I, salvo el primer artículo, son de aplicación, con las modificaciones necesarias, a la interpretación de los actos jurídicos que no sean contratos”.

Estas normas deben referirse a los actos jurídicos unilaterales, pues los contratos son actos bilaterales o multilaterales. Al ser actos unilaterales, las reglas de interpretación no

pueden ser igual a la de los contratos. De ahí que se atienda más al criterio objetivo de razonabilidad que al de la intención del autor del acto.

No existe ninguna norma similar en el Derecho español aunque se consideran por la jurisprudencia actos que reflejan la voluntad de quien emite la declaración con la intención de asumir los deberes que de ella deriven (STS 30 de septiembre de 1975 (RJ 1975, 3408). Si bien, es admitido que cabe utilizar las normas de interpretación del contrato de los arts. 1281 y ss CC.

III- Conclusiones

El legislador europeo, en su tendencia a la unificación del Derecho contractual europeo, ha optado por unir el criterio subjetivo y objetivo en materia de interpretación, si bien, como regla general, de acuerdo con la tradición europea ha mantenido el buscar la voluntad común de las partes.

La búsqueda de dicha voluntad se hace con los sistemas tradicionales utilizados por los intérpretes jurídicos: criterio literal, sistemático; lógico; finalista; y, por influencia del Derecho de consumo, contra la parte que motivó la oscuridad o la dificultad en la interpretación.

No obstante, los rasgos del Common Law se dan básicamente en el ámbito del criterio de la razonabilidad, similar en resultados a la buena fe objetiva, cuando la voluntad real no puede encontrarse con los medios subjetivos tradicionales.

La regulación del Marco Común de Referencia no es muy novedosa, pues el legislador ha optado por ir recogiendo las diferentes normas internacionales en materia de contratación mercantil existentes, básicamente, los Principios Unidroit y la Convención Internacional de Compraventa de Mercaderías de 1980.

IV- BIBLIOGRAFÍA

DE CASTRO Y BRAVO, F: *El negocio jurídico*, Madrid, reimpresión edición 1971, Civitas, 1985.

CORTADA CORTIJO, N., "Interpretación", Derecho Europeo de Contratos. Libros II y IV del Marco Común de Referencia, T.I, coord..por Vaquer Aloy/Bosch Capdevila/Sánchez González, Atelier, Barcelona, 2012.

DIEZ-PICAZO, L.: *Fundamentos del derecho civil patrimonial. I. Introducción. Teoría del contrato*, Madrid, Civitas-Thomson 6ª ed., 2007.

DIEZ PICAZO/ROCA/MORALES, *Los principios de Derecho Europeo de Contratos*, Madrid, Civitas, 2000.

ESPIAU ESPIAU, "Interpretación del contrato y bases del derecho contractual europeo", *Bases de un derecho contractual europeo*, coord. por Santiago Espiau Espiau, Antoni Vaquer Aloy, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

JORDANO BAREA: "La interpretación de los contratos", en *Libro Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goytisolo*, Vol. 1, Consejo General del Notariado, Madrid, 1988.

LÓPEZ LÓPEZ, AMª: "Comentario a los arts. 1281-1289", en *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, XVII-2ª, dir. Por M. Albaladejo, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1981.

PARRA LUCÁN, Mª A.: "Interpretación del contrato", en *Derecho Privado Europeo*, coord.. por Sergio Cámara Lapuente, Colex, Madrid, 2003.

VATTIER FUENZALIDA, C.: "La interpretación del contrato, entre la intención de las partes y el criterio de una persona razonable", *Actualidad Civil*, 2010-2, p. 1627